

PROYECTO DE INDICACION

De: César Quiroga Soria, Asesor Legislativo Externo.
A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV
Materia: Indicación al proyecto de ley que perfecciona diversos textos legales para promover la inversión.
Fecha. 15 de Mayo de 2019

De mi consideración:

Por intermedio de la presente y de conformidad a su requerimiento, pongo a su consideración, el proyecto de indicación de la referencia.

PROYECTO DE LEY QUE PERFECCIONA DIVERSOS TEXTOS LEGALES PARA PROMOVER LA INVERSION.

Senador José Miguel Durana Semir.

Incorporar un nuevo artículo al proyecto de ley que agregue un inciso segundo al artículo 4º de la Ley No. 20.169, (ley de pronto pago a 30 días), bajo el siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior y cualquiera sea la naturaleza jurídica del deudor, la empresa de menor tamaño afectada podrá demandar el monto de los perjuicios que deriven del incumplimiento, de acuerdo a las normas generales. La acción podrá ser ejercida por el afectado personalmente, en demanda colectiva o representado por la entidad gremial que les agrupe, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo noveno números dos al cinco de la ley que fija normas especiales para empresas de menor tamaño.”.

Justificación de la Indicación:

La Ley 20169, ley de pronto pago a 30 días, conlleva una omisión que no fue motivo de discusión en la Comisión de Economía del Senado ni de aprobación

congresal, cual es la eliminación del inciso segundo del artículo 4 de la Ley 20.169, el cual debe ser repuesto a través de una indicación o un proyecto de ley que lo contemple.

El escenario de una indicación en el contexto del proyecto de ley destinado a promover la inversión, aparece como adecuado, puesto que se trata de reponer la facultad de las pymes de poder ejercer acciones contra conductas que implican competencia desleal.

Sin otro particular,

César Quiroga Soria
Asesor Legal Externo

INFORME DE INDICACIONES

De: César Quiroga Soria, Asesor Legislativo Externo.
A: José Antonio Durán Semir, Senador Región Arica y Parinacota.
Materia: Estatuto Laboral jóvenes estudiando en Educación Superior.

Estimado Senador:

Por intermedio de la presente, pongo a su consideración el texto de las indicaciones sugeridas al proyecto de ley referido al Estatuto Laboral de jóvenes estudiantes de educación superior, en base a los argumentos que en cada caso se exponen:

INDICACIONES PROYECTO DE LEY: ESTATUTO LABORAL PARA JOVENES QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO EN LA EDUCACION SUPERIOR.

Indicaciones Senador José Miguel Durana Semir:

1. Sustituir el nombre del proyecto de Ley por el siguiente: ***“Proyecto de Ley sobre contrato alternativo de trabajo y régimen de descanso para estudiantes trabajadores jóvenes”***.

(Fundamento de la indicación: Se trata de un contrato de trabajo con características especiales, por ello las partes que lo pueden celebrar deben encontrarse expresamente individualizadas.)

2. Modificar el artículo 1 del proyecto de ley, con el siguiente texto:

“Artículo 1°. Agrégase, al Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el siguiente art. 40 bis E, nuevo:

“Artículo 40 bis E.- Los estudiantes trabajadores jóvenes podrán acordar con sus empleadores un contrato de trabajo que contenga una jornada parcial alternativa y un régimen de descanso, acorde a su calidad de estudiante, de conformidad a las normas precedentes y a las siguientes reglas especiales:

(Fundamento de la indicación: Se debe explicitar que se trata de un contrato de trabajo que tiene características especiales, no basta con señalar que la jornada laboral es alternativa.)

- a) Se entiende por estudiante trabajador, toda persona que tenga entre 18 y 28 años de edad inclusive, que se encuentre cursando estudios regulares o en vías de titulación en alguna institución de educación superior, universitaria o técnica, reconocida por el Estado o en entidades ejecutoras de programas de nivelación de estudios. El límite superior de edad de 28 años no será aplicable para aquellos estudiantes con discapacidad certificados de acuerdo a la ley N° 20.422. Asimismo, el límite superior de edad de 28 años no se entenderá cumplido sino hasta la finalización del año calendario en el cual, el estudiante trabajador joven cumpla la edad de 28 años.*

(Fundamentación de la indicación: El rango de edad de 18 a 28 años debe mantenerse puesto que un estudio del Mineduc determinó que los

estudiantes en Chile se titulan en promedio a los 28,8 años de edad.

Es importante hacer la salvedad de los estudiantes con capacidades diferentes. Asimismo, si un estudiante cumple la edad máxima de 28 años durante el año, debe permitírsele continuar con este régimen hasta la finalización del año calendario.)

b) La calidad de estudiante trabajador, será acreditable a través de la presentación de su certificado de nacimiento y del certificado correspondiente, emitido por la institución educacional respectiva, dentro del plazo de 90 días corridos, a partir del inicio de la relación laboral o en caso de existir una relación laboral anterior, dentro de los 30 días corridos siguientes a que el estudiante trabajador y su empleador acuerden pactar el contrato alternativo de trabajo y régimen de descanso para estudiantes. Las instituciones de educación superior mencionadas en la letra a) deberán emitir el certificado solicitado, para estos fines, por el estudiante, de forma gratuita, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su solicitud. La calidad de moroso del estudiante en el pago de cualquier obligación financiera con la institución educativa, no será motivo para negar la emisión de la certificación solicitada.

Los certificados mencionados precedentemente deberán anexarse al contrato individual de trabajo y el empleador, estará obligado a mantener un registro especial de esta modalidad de contratos y los certificados correspondientes.

(Fundamento de la indicación: Son dos los requisitos copulativos: calidad de estudiante y edad. Debe acreditarse con los certificados correspondientes.

Si el trabajador que cumple con el requisito de edad comienza a estudiar debe acreditar esto en el plazo de 30 días. Sin recién comienza a trabajar en el plazo de 90 días (puesto que muchas veces las I. educativas de demoran en la parte administrativa al inicio de gestión. La emisión del certificado debe ser en el mas breve plazo: 5 días y de forma gratuita.

Los certificados que acreditan la edad y la calidad de estudiante, deben anexarse a los contratos y guardarse en un archivo especial, dada la modalidad de estos contratos.)

c) En caso que el estudiante trabajador deje de tener la calidad de tal o que cumpla la edad de 28 años, se aplicarán las normas generales del Código del Trabajo. Sin perjuicio de ello, la calidad de estudiante trabajador podrá ser nuevamente acreditada por el trabajador en el plazo de seis meses a contar de su pérdida de calidad de estudiante. En el caso de que el estudiante trabajador cumpla la edad de 28 años de edad, el término del contrato de estudiante trabajador, concluirá a la finalización del año calendario respectivo, continuándose la relación laboral de conformidad a las normas generales de este Código.

(Fundamento de la indicación: Un estudiante trabajador puede, por cualquier razón tener discontinuidad en sus estudios y debe existir un margen de tiempo (seis meses) para que vuelva a acreditar esa calidad. Por Ej. Si congela sus estudios. Si se cambia de carrera, etc, Si cumple los 28 años a inicios o mediados de año no debe perder su calidad de trabajador estudiante sino hasta la conclusión del respectivo año calendario.)

d) *La jornada ordinaria diaria en esta modalidad de contrato alternativo de trabajo y régimen de descanso para estudiantes trabajadores jóvenes podrá ser continua o discontinua, con un máximo de dos interrupciones diarias, considerando la compatibilidad de la jornada laboral pactada con el horario académico del estudiante.*

Las horas efectivamente trabajadas no podrán superar las ocho horas diarias y sumados los periodos trabajados y los de interrupción, estos no podrán superar las doce horas diarias.

(Fundamento de la indicación: La jornada puede ser discontinua con hasta dos interrupciones, de acuerdo a los requerimientos académicos de los estudiantes trabajadores.

Dado que se trata de una contrato de trabajo, con características especiales y a los efectos de resguardar los derechos de los estudiantes trabajadores, su jornada laboral no podrá ser superior a 8 horas y considerando las dos interrupciones que puede tener no debe abarcar un lapso mayor de doce horas.)

e) *El estudiante trabajador tendrá derecho a que se le otorguen permisos para a un permiso rendir sus exámenes académicos, sin goce de haberes, salvo acuerdo en contrario, debiendo informar al empleador por escrito y con al menos siete días corridos de anticipación, la forma en que hará uso del permiso para efectos de rendir dichos exámenes. Este permiso no podrá ser negado por el trabajador.*

(Fundamento de la indicación: Si bien es lógico que los permisos otorgados para la rendición de exámenes sean sin goce de haberes, debe existir la posibilidad de que las partes acuerden lo contrario. Este permiso no puede ser negado por el trabajador.)

- f) *Durante su periodo de vacaciones el estudiante trabajador podrá pactar con su empleador, por escrito, continuar con su contrato alternativo de trabajo y régimen de descanso para estudiantes trabajadores jóvenes, suspender su relación laboral o que la misma sea adecuada, durante dicho periodo, a las normas generales del contrato de trabajo.*

(Fundamentos de la indicación: Se deben plantear alternativas para los periodos del año en que el trabajador estudiante se encuentre en periodo de vacaciones académicas).

- g) *Los estudiantes trabajadores que sean beneficiarios del régimen de prestaciones de salud conforme a lo dispuesto en las letras b) y c) del artículo 136 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, mantendrán su calidad de beneficiarios con aporte en la institución de salud de la cual sean carga. La institución de salud previsional deberá mantener la calidad de beneficiario con aporte del estudiante trabajador.*
- h) *Los estudiantes trabajadores mantendrán su calidad de causantes de asignación familiar hasta la edad establecida por ley, no obstante las remuneraciones que perciban.*
- i) *Las remuneraciones que perciba el estudiante trabajador no se considerarán como renta para efectos de determinar su condición socioeconómica o la de su grupo familiar para los efectos de*

acceder a créditos, becas, subsidios o régimen de gratuidad u otros similares para financiar sus estudios.”

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria
Asesor Legislativo Externo

INDICACION A PROYECTO DE LEY

De: César Quiroga Soria, Asesor Legislativo Externo.
A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV
Materia: Indicación a proyecto de ley que fortalece el sistema de inteligencia del Estado.
Fecha: 27 de Mayo de 2019

Estimado Senador:

Por intermedio de la presente, pongo a su consideración, un proyecto de indicación al proyecto de Ley de la referencia.

PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE Y MODERNIZA EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO.

INDICACION:

Senador José Miguel Durana Semir

Indicación:

Agregar un inciso segundo al artículo 44 ter propuesto, en los siguientes términos:

“Artículo 44 ter.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, el Diputado o Senador que viole los deberes de guardar secreto de los informes o antecedentes obtenidos en virtud de lo dispuesto en los artículos 37 y 37 bis, según corresponda, será sancionado con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares.

No se entenderá que se comete violación de guardar secreto de los informes obtenidos en los términos descritos en el inciso precedente, cuando, dicha información o antecedentes, sean utilizados para fines propios de fiscalización parlamentaria o cuando, de los mismos, emanen hechos irregulares que transgredan la probidad pública o impliquen la comisión de crímenes o simples delitos.”

Justificación de la Indicación:

El proyecto de ley en su texto original propuesto, implicaría que cualquier uso que un Diputado o Senador hiciera de la información obtenida en los términos de los artículos 37 y 37 bis (referidos a los informe que debe rendir el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia o a los informes que le pueden ser requeridos por Diputados o Senadores) de la misma norma será constitutivo de delito.

En consecuencia, la prohibición, no sólo de su divulgación sino que de cualquier tipo de uso se encuentra, en los términos del proyecto con pena privativa de libertad.

Es evidente que la recepción de los mencionados informes por parte de los parlamentarios, implica el deber de reserva respecto de las materias contenidos en los mismos, puesto que conllevan aspectos que tienen relación con la seguridad del Estado. Sin embargo, debe existir un justo equilibrio entre el deber de reserva de la información solicitada y las facultades de fiscalización de los parlamentarios.

De esta forma, no cualquier acto parlamentario, que tenga relación con los informe de inteligencia recibidos, puede ser tomado como base para el inicio de una acción penal en contra del legislador. En este sentido, la labor de fiscalización parlamentaria adquiere especial relevancia,

cuando del contenido de dichos informes contienen actos que puedan ser calificados como contrarios a la ley o constitutivos de delitos.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria
Asesor Legislativo Externo

PROYECTO DE LEY: CIBER BULLYNG

De: César Quiroga Soria, Asesor Legislativo Externo.
A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV
Materia: Proyecto de Intervención.

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, sugiero a Ud. el siguiente proyecto de intervención, en el marco de la discusión del proyecto de ley a ser tratado:

Proyecto de intervención:

El proyecto de ley asume una realidad que hoy convida con nuestros estudiantes cual es el mal uso de los medios tecnológicos a través de las prácticas del cyberbullying.

Como legisladores, debemos generar normas que permitan enfrentar las nuevas problemáticas de nuestra sociedad, en especial los más jóvenes.

En términos estadísticos, la generación Z, correspondiente a nuestros niños, adolescentes y jóvenes nacidos a partir de 1994, se caracteriza porque sus integrantes nacieron y se desarrollan inmersos en un entorno digital y es, a través del mal uso de ese ámbito que se generan situaciones nuevas, algunas de ellas negativas, como el cyberbullying que, nosotros, como legisladores tenemos la obligación de atender, dados sus efectos nocivos y en muchos casos devastadores. Sobre todo, considerando que en la mayoría de los casos este mundo digital escapa del control y vigilancia de sus propios padres.

La convivencia escolar no sólo debe implicar una definición que involucre el desarrollo integral de los estudiantes, sino que, debe ser dinámica, atendiendo oportunamente a los nuevos requerimientos que implique la vivencia y experiencia de los estudiantes.

Es por ello que el “encargado de convivencia escolar” que la ley ya contempla, a partir de este proyecto, tendrá nuevas competencias de tal forma que su labor sea proactiva a través de la generación e implementación de un plan de convivencia escolar.

Esta labor, para lograr sus frutos, no puede ser concebida en términos abstractos, sino que surge la necesidad de que sea el producto de adecuados canales de coordinación y complementación, con todos los actores de la comunidad educativa, a través de la utilización de herramientas como la trascendente educación emocional de nuestros estudiantes.

El énfasis de esta tarea debe ser en el ámbito preventivo, para evitar, tempranamente, las secuelas de esta modalidad de agresiones. En este sentido, la mejor forma de prevenir es educar, informar, formar en valores y enseñar el buen uso de la tecnología, alejando a las nuevas generaciones de las malas prácticas en las cuales esta puede ser utilizada y en esto nos debemos involucrar todos.

Es importante destacar la modificación que se realiza a través de este proyecto de ley, a los efectos de entender que acoso escolar es TODA agresión u hostigamiento que provoque maltrato, humillación o temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, por cualquier medio, incluidos los tecnológicos, tomando en cuenta la edad y condición de quien lo sufre.

Finalmente, es importante destacar que las actividades y medidas reparatorias que el establecimiento educacional debe desarrollar, involucre no sólo a la víctima y su familia, hasta asegurar su reinserción en la comunidad educativa, abarcando aspectos de salud mental y psicológica.

Sugerencia: Manifiesto mi conformidad con este proyecto de ley.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria

Asesor Legislativo Externo

PROYECTO DE INTERVENCION: MODIFICACION DEL ART. 19 No. 8 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO.

De: César Quiroga Soria, Asesor Legislativo Externo.
A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV
Materia: Proyecto de Intervención.

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, sugiero a Ud. el siguiente proyecto de intervención, en el marco de la discusión del proyecto de ley a ser tratado:

Proyecto de Intervención:

La incorporación, en forma explícita, en nuestro orden constitucional, del deber que le asiste al Estado, en orden a cuidar la preservación de la naturaleza en general, constituye el desarrollo de un mandato constitucional que ya se encuentra vigente en nuestra Constitución Política del Estado, referido al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Para ello, el artículo propuesto no sólo se queda en la enunciación de un deber del Estado, sino que describe acciones concretas como es el promover la integridad de los organismos vivos, de las plantas y de los animales, debiéndose realizar acciones concretas para mantener el medio ambiente, de tal forma de permitir la preservación de las especies.

Una interpretación dada por ley de la norma hoy existente habría bastado para conseguir el objeto de este proyecto de modificación constitucional pero sin duda, la redacción que se propone habla de “integridad” y ello permitirá un desarrollo legislativo más amplio.

Una disposición constitucional como la propuesta nos interpela como sociedad y nos plantea desafíos legislativos en materias tan amplias como la mutación genética o el desarrollar sistemas de protección frente a formas de contaminación que hoy debemos enfrentar como nuevos desafíos.

Sugerencia: Es por ello que manifiesto mi aprobación al presente proyecto de ley.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria
Asesor Legislativo Externo

PROYECTO DE LEY: PROMOCION DE LA MUSICA NACIONAL EN EVENTOS MASIVOS.

De: César Quiroga Soria, Asesor Legislativo Externo.
A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV
Materia: Proyecto de Intervención.

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, sugiero a Ud. el siguiente proyecto de intervención, en el marco de la discusión del proyecto de ley a ser tratado:

Proyecto de Intervención:

Este proyecto de ley que busca generar espacios para la difusión de la música nacional, genera una discriminación positiva en favor de nuestros artistas nacionales y constituye un incentivo a la difusión de nuestra música y cultura, en el marco de los eventos musicales masivos que se presenten en Chile.

Sin embargo, hay algunos aspectos que mejorar en la etapa de indicaciones y discusión en particular del proyecto, como son por ejemplo el hecho de que la “masividad” de un evento musical, fijada en una proyección de concentración de más de tres mil personas, no necesariamente es coincidente con un criterio de masividad en nuestras regiones, donde mil o dos mil personas, dado el tamaño de nuestras localidades puede entrar dentro de la categoría de “masivo”.

Por otra parte, es necesario incorporar en el proyecto, incentivos para que estas expresiones musicales nacionales cuya identificación se incentiva, tengan una identidad regional, sobre todo en eventos que, al ser masivos, constituyen canales adecuados para nuestra difusión cultural.

El proyecto excluye a los festivales y celebraciones efectuados por una Municipalidad y este es un aspecto que debe corregirse o precisarse, puesto que grandes eventos musicales de nuestro país, algunos de carácter

internacional, son organizados o patrocinados por municipalidades y quedarían al margen de la presente ley.

Asimismo, se limita la venta de entradas a públicos denominados “exclusivos o preferenciales” a un porcentaje no superior al 50%, lo cual no aparece como directamente relacionado al objeto del proyecto, cual es la promoción de los artistas y la música nacional y por lo tanto considero que es un factor extraño que deber ser excluido del proyecto y tratado en una iniciativa legal que tenga por objeto esa temática.

Sugerencia: En consideración a lo expuesto, manifiesto mi aprobación, en general al presente proyecto de ley.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria
Asesor Legislativo Externo

PROYECTO DE INTERVENCION: MODIFICACION ART. 126 CPE A FIN DE REEMPLAZAR LA DENOMINACION “ISLA DE PASCUA” POR “RAPA NUI- ISLA DE PASCUA”

De: César Quiroga Soria, Asesor Legislativo Externo.
A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV
Materia: Proyecto de Intervención.

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, sugiero a Ud. el siguiente proyecto de intervención, en el marco de la discusión del proyecto de ley a ser tratado:

Proyecto de Intervención:

El proyecto de ley que hoy votamos, lejos de representar una simple discusión sobre la denominación de una parte de nuestro territorio, demuestra la necesidad de resaltar, en nuestra labor legislativa, los elementos que configuran la identidad de nuestros localidades y regiones.

Podemos encontrar numerosos ejemplos en los cuales, la tradicional visión centralista de nuestro Estado, bautizó pequeñas localidades o grandes regiones, sin considerar genuinos factores de identidad local que permanecen en el tiempo, desde antes de nuestra existencia como Nación.

Es por ello que, la incorporación de “Rapa Nui” a la denominación de lo que nuestra legislación llama: “Isla de Pascua”, constituye una reivindicación de identidad que va mucho mas lejos de lo meramente nominativo, Es la expresión auténtica de la comunidad, recogida hoy, en un acto de justicia, por nuestra legislación.

Debemos celebrar la amplitud y madurez de la discusión de la propuesta a nivel de la Comisión, la cual concluye con un justo equilibrio entre la expresión comunitaria y local: Rapa Nui, con el grado de conocimiento y difusión del nombre actual: Isla de Pascua.

Esto demuestra que la identidad y sus expresiones de reivindicación van de la mano con los intereses de la comunidad integralmente considerados,

evitando las consecuencias administrativas que la radicalidad de un cambio pueda generar.

Valga este ejemplo para que nuestras regiones sigan este camino de visibilización de sus denominaciones originarias que los enorgullecen y que muchas veces se han visto postergadas por la pesada carga que implica la impronta de un Estado centralizador.

La hora de que nuestra riqueza cultural local y regional, sobre la base de la cual se ha construido el Estado de Chile, ha llegado y esto pasa por el respeto y reconocimiento de la identidad de nuestras comunidades de origen.

Esta temática tiene un efecto multiplicador y enriquecedor de nuestras nuevas generaciones.

La visibilización de la diversidad cultural, de sus valores, lenguas y costumbres deben ser motivo de orgullo de nuestros jóvenes y desterrar cualquier elemento de discriminación.

Ese es un factor fundamental para que estos vuelvan a sus comunidades de origen y no tengamos que enfrentar, como Estado, procesos de despoblamiento de grandes extensiones de nuestro territorio, como ocurre en la Provincia de Parícut.

Difundir, mostrar y enseñar nuestra diversidad cultural generará nuevos actores que, en la riqueza de sus diferentes rostros y miradas, serán la base de un país de reencuentros que constituye uno de los mayores legados que podremos dejar a las nuevas generaciones de chilenos.

Sugerencia: Es por ello que manifiesto mi aprobación a este proyecto de ley.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria

Asesor Legislativo Externo

PROYECTO DE LEY

De: César Quiroga Soria, Asesor Legislativo Externo.

A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV

Materia: Proyecto de Ley que modifica la Ley 21.020

De mi consideración:

Por intermedio de la presente y de acuerdo a su requerimiento, pongo a su consideración el proyecto de ley que modifica la Ley 21020 (Ley Cholito) con el objetivo de crear un sistema de seguros para mascotas y animales de compañía:

PROYECTO DE LEY: MODIFICA E INCORPORA EN LA LEY 21020 (LEY CHOLITO) DISPOSICIONES QUE PROMUEVAN EXPRESAMENTE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA.

Senador: José Miguel Durana Semir.

Antecedentes.

De acuerdo a la encuesta realizada por la Consultora GFK, realizada en el año 2018, un 64% de los hogares de Chile cuentan con alguna mascota, porcentaje que se incrementa a más de un 70% cuando en dichos hogares existen niños. En este mismo sentido, un 52% de los hogares en Chile tienen a lo menos un perro como mascota. Un 25% poseen a lo menos un gato y un 5% a lo menos algún otro tipo de mascota.

De conformidad al mismo estudio, un 70% de los dueños o tenedores de mascotas las llevan al Veterinario, siendo este porcentaje, principalmente

incidido por los sectores ABC1 quienes invierten una mayor cantidad de recursos en la salud de sus mascotas y animales de compañía.

De esta forma, se estima que frente a los sectores ABC1, que invierten un promedio de \$ 36.274, los sectores C2 invierten \$ 32.249: C3 un monto promedio de \$ 27.670 y D un monto de \$ 20.032.

En consecuencia, la inversión en salud realizada por los sectores socioeconómicos, clasificados como C2, C3 y D en proporción a su nivel de ingresos, es aún más significativa.

La población cuyo rango etáreo comienza en los 53 años, es decir, adultos, adultos mayores, personas de la tercera y cuarta edad, son quienes, en mayor proporción, invierten en la salud de sus mascotas, alcanzando a un 83% respecto de quienes gastan recursos en ello, lo cual es coincidente con la etapa de sus vidas en la cual sus ingresos económicos comienzan a mermar, sobre todo si se considera que en dicho rango etáreo se encuentren personas jubiladas y pensionadas.

En Nueva Zelanda, a partir de la ley aprobada el 19 de Mayo de 2015, se encuentra vigente el “Animal Welfare Bill” o proyecto de ley del bienestar animal, norma a través de la cual se reconoce que los animales son sensibles (física y moralmente), constituyendo deber de los humanos el atender, bajo condiciones adecuadas, el bienestar de los animales a tiempo de prohibir probar productos químicos, médicos o de belleza en cualquier especie animal.

En Marzo de 2016, la Comisión Europea (Eurobarómetro especial 442) enumeró, en base a los postulados de la activista Ruth Harrison, escritos en 1964, las cinco actitudes que los europeos deben tener con el bienestar animal, debiendo procurarse que los animales se encuentren:

- Libres de pasar hambre y sed;
- Libres de molestias;
- Libres de dolor, heridas y enfermedades;
- Libres para expresar un comportamiento normal
- Libres de pasar miedo y angustia.

La Ley 21020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, mas conocida como Ley Cholito, establece, como su objeto, el establecer normas relativas a las mascotas, entre las cuales se encuentran el proteger la salud y el bienestar animal mediante la tenencia responsable de mascotas y proteger la salud pública, mediante, entre otros la aplicación de medidas de control para la población de mascotas y animales de compañía.

La mencionada ley introduce el concepto de *“animal abandonado”*, definiéndolo como: *“toda mascota o animal de compañía que se encuentre sin vigilancia de la persona responsable de él o que deambule suelto por la vía pública. También se considerará animal abandonado, todo animal que hubiese sido dejado en situación de desamparo en una propiedad privada, sin cumplir con las obligaciones referidas a una adecuada tenencia responsable”*.

La misma ley, establece que dentro de las obligaciones que comprende la tenencia responsable de mascotas o animales de compañía, se encuentra *“brindarle los cuidados veterinarios indispensables para su bienestar”* y el respeto a las normas de salud y seguridad públicas que le sean aplicables.

De conformidad al artículo 3º de la Ley 21020, los órganos de administración del Estado, entre ellos, el Ministerio de Salud, dentro de sus competencias, con la colaboración de las respectivas municipales, deben promover la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía *“a fin de asegurar su bienestar y salud de las personas y el medio ambiente”*.

Asimismo, se establece que dentro de las orientaciones que puede proporcionar el Ministerio de Salud se encuentra el compromiso de las personas con la salud de los animales de compañía, pudiendo desarrollar programas de promoción de esta temática, creando instancias de coordinación con Universidades que impartan la carrera de medicina veterinaria a fin de generar campañas de información a la comunidad y esterilización gratuita de caninos y felinos. Las normas sobre tenencia responsable de mascotas son objeto, por disposición de la Ley de un reglamento, el cual debe incluir, de acuerdo a la norma: *“Condiciones para el desarrollo de programas de esterilización masiva y obligatoria de animales, con el objeto de promover su bienestar y salud (...)”*. En esta materia, la Ley contempla un conjunto de

normas que comprenden una “*Estrategia de protección y control de población animal*”, permitiendo entre otras medidas que las municipalidades puedan, establecer, en el marco de su disponibilidad presupuestaria, fondos concursables a los cuales puedan postular las personas jurídicas sin fines de lucro, cuyos objetivos sean la protección de los animales y la promoción de su tenencia responsable.

En el caso de los locales de venta y crianza de mascotas o animales de compañía la determina que los mismos deben estar a cargo de un médico veterinario y llevar un registro que determine el reglamento de Ministerio de Salud así como los controles periódicos a que deben someterse los animales, correspondiendo al mencionado médico veterinario asegurar que las mascotas cuenten con vacunas y tratamientos antiparasitarios correspondientes a su edad y especie.

Idea Matriz del Proyecto: Perfeccionar la Ley 21020, generando las condiciones legales adecuadas para que los tenedores responsables de animales domésticos y mascotas, en especial las personas de la tercera edad y las personas de menores recursos económicos, puedan acceder para su adecuado cuidado a servicios de salud previamente contratados y a bajo costo.

Asimismo, constituye idea matriz de este proyecto de ley el ampliar el concepto de abandono de mascota, incorporando para su configuración la falta de atención en materia de salud.

Proyecto de Ley:

Artículo 1: Se modifica el artículo 2, numeral 2 de la Ley 21020, en el siguiente sentido:

Artículo 2°.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:(...)

(...) 2) Animal abandonado: toda mascota o animal de compañía que se encuentre sin la vigilancia de la persona responsable de él o que deambule suelto por la vía pública. También se considerará animal abandonado, todo animal que hubiese sido dejado en situación de desamparo en una propiedad privada sin cumplir las obligaciones referidas a una adecuada tenencia responsable o cuya condición de salud no sea atendida o cuyas

necesidades de salud no sean provistas por sus tenedores o poseedores.”

Artículo 2: Se incorpora en el artículo 2 de la Ley 21020, el siguiente numeral signado como No. 11:

11) Bienestar animal: esta constituido por las condiciones que permitan que las mascotas o animales domésticos puedan vivir libres de pasar hambre y sed; libres de molestias; libres de dolor, heridas y enfermedades, libres de expresar un comportamiento normal y libres de pasar miedo y angustia.”

Artículo 3: Modifíquense los artículos 3, 4, 7, 9, de la Ley 21020, en el siguiente sentido:

- Artículo 3: *“Los órganos de la Administración del Estado y, en especial, los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Salud y de Educación, dentro de sus respectivas competencias, con la colaboración de las respectivas municipalidades, promoverán la tenencia responsable de mascotas o animales de compañía a fin de asegurar su bienestar, **sus adecuadas condiciones de salud** y la salud de las personas y el medio ambiente.*
- “Artículo 4°.- Mediante un reglamento dictado a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Salud, se establecerá la forma y condiciones en que se aplicarán las normas sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, **incluyendo sus condiciones de salud.**

El Ministerio de Salud reglamentará los servicios de salud pre-paga para mascotas y animales de compañía. Las características y requisitos que deben cumplir los Médicos Veterinarios o asociaciones privadas de médicos veterinarios para la prestación de este servicio, la descripción de su cobertura y las garantías que deben cumplir, incluyendo mecanismos de certificación y las sanciones a ser impuestas a quienes incumplan con los contratos de prestación de salud privada pre-paga para mascotas y animales de compañía.

Además, dicho reglamento determinará las normas que permitirán calificar a ciertos especímenes caninos como potencialmente peligrosos.”

- “Artículo 7º.- Las municipalidades deberán dictar una ordenanza sobre la tenencia responsable de mascotas o animales de compañía en el territorio comunal, la que deberá ajustarse a la normativa legal que regula la materia y al reglamento mencionado en el artículo 4º, estableciendo como contenidos mínimos los determinados en el artículo 5º y **garantizando adecuadas condiciones de bienestar animal, contenidos en el numeral 11 del artículo 2** de esta ley.

Sin perjuicio de lo anterior, las ordenanzas municipales no podrán permitir la utilización de métodos que admitan el sacrificio de animales como sistema de control de la población animal. Esta prohibición se extiende a todos los servicios públicos, así como también a todas las organizaciones de protección animal.”

- “Artículo 9º.- Para los fines indicados en el artículo anterior, las municipalidades podrán establecer, en el marco de su disponibilidad presupuestaria, fondos concursables a los cuales podrán postular las personas jurídicas sin fines de lucro, entre cuyos objetivos esté la protección **integral** de los animales, **incluyendo la atención de las condiciones de salud de las mascotas y animales domésticos así como** la promoción de la tenencia responsable.”

Es cuanto pongo a su consideración para fines pertinentes,

César Quiroga Soria
Asesor Legislativo Externo

